



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia



Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

AUTOR: JUAN JOSE SOLANO AVELLA

DIRECTOR: MARCO EMILIO SANCHEZ ACEVEDO

Desarrollo e Implementación del Expediente Digital en la administración pública en Colombia: Futuras concepciones para llegar a la virtualidad de los procesos judiciales y administrativas

Development and Implementation of the Digital File in the public administration in Colombia: Future conceptions to reach the virtuality of judicial processes

Resumen

Debido al incremento desbordado de la tecnología en el actual mundo globalizado, el estado colombiano ha promovido su aplicación en las actuaciones públicas con diferentes leyes que desarrollan la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el mundo jurídico, es por ello que el presente texto abarcara los elementos que caracterizan el expediente digital en la administración pública en Colombia, a partir de tres puntos claves: el primero de ellos es discernir la utilización de tecnologías en la administración pública en Colombia, el segundo marco jurídico en Colombia para el expediente digital, y el tercero es la determinación de los elementos específicos del expediente digital en Colombia para su implementación.

Palabras Clave

Administración pública, Expediente digital, Documentos, Información, Integridad, Autenticidad, Colombia

Abstract

Due to the accelerated increase in technology in the current globalized world, the Colombian state has promoted its application in public actions with different laws that develop the inclusion of information and communication technologies (TIC) in the legal world, that is why that in this text the elements that characterize the digital file in the public administration in Colombia will be developed, based on three key points: the first is to discern the use of technologies in the public administration in Colombia, the second legal framework in Colombia for the digital file, and the third is the determination of the specific elements of the digital file in Colombia for its implementation.

Key words

Public administration, Digital file, Documents, Information, Integrity, Authenticity, Colombia.

Sumario

Desarrollo e Implementación del Expediente Digital en la administración pública en Colombia: Futuras concepciones para llegar a la virtualidad de los procesos judiciales y administrativas	1
Development and Implementation of the Digital File in the public administration in Colombia: Future conceptions to reach the virtuality of judicial processes	2
Resumen.....	2
Introducción	4
Capítulo I: Estructura del expediente digital	6
1.1 Estructura y componentes del expediente administrativo tradicional.....	6
1.2 Estructura y componentes del expediente administrativo electrónico	7
1.3 Estructura de la política de gobierno digital	8
1.4 Descongestión y celeridad judicial y administrativa	9
1.5 Desafíos y Beneficios de la implementación de medios electrónicos	10
Capítulo II Marco jurídico Colombiano para la implementación del expediente digital en la administración pública colombiana.....	11
2.1 Marco constitucional para el expediente administrativo digital	11
Retos de los servidores públicos en plataformas digitales	12
2.2 Marco jurisprudencial colombiano para el expediente administrativo digital.....	13
2.3 Gestion documental del Archivo General de la Nación	14
2.4 Derecho internacional	16
Capítulo III Analizar los elementos estructurales y de desarrollo para la implementación del expediente digital en la administración pública en Colombia.....	18
3.1 Futura regulación de la abogacía a través de medios digitales	18
3.2 Representación electrónica de ciudadanos	22
3.3 Autenticidad, integridad y disponibilidad del expediente digital	23
Conclusiones.....	25
Bibliografía.....	27

Introducción

En principio para adentrarse en el expediente administrativo digital, es necesario comprender como la tecnología ha avanzado exponencialmente, de esta manera, los estados han fomentado el uso de la tecnología tanto en ámbitos privados como públicos. Esto se puede evidenciar, en las diferentes posibilidades que tienen las personas para realizar diligencias o comunicados con el estado, ejemplo de ello, las peticiones, quejas y reclamos (PQR) o solicitudes que pueden realizar a través de páginas web de instituciones del públicas, las cuales tienen la misma validez y eficacia de las formas tradicionales, claro está, si se realizan cumpliendo todos los presupuestos establecidos en la el marco jurídico.

Ahora bien, desde esta perspectiva surge una necesidad para el Estado colombiano en relación con la creación de portales y posibilidades electrónicas que garanticen la comunicación entre los ciudadanos con la administración, para así brindar un servicio virtual completo y eficiente a la comunidad. Es por ello, que surge la justificación del presente documento: el expediente digital en la administración pública, figura que se presenta actualmente en una forma sin desarrollar todo el potencial de la tecnología, pero para el futuro será completamente normal que se realicen todas las actuaciones a través de un expediente en medios electrónicos.

Por lo cual, para el presente texto se propone como pregunta de investigación: ¿Qué características debe tener el expediente digital en la administración pública en Colombia? Teniendo como objetivo general determinar las características del expediente digital en Colombia y como objetivos específicos: Analizar la utilización de tecnologías en la administración pública, determinar las características del expediente administrativo tradicional y establecer los elementos específicos del expediente digital en la administración pública en Colombia.

De igual forma, conceptualizamos lo anterior debido a que la evolución de la sociedad como resultado de la transformación de los medios de comunicación, quiere decir, que son los medios de y sus transformaciones los que producen verdaderos cambios y que los modernos sistemas de comunicación colocan al hombre en una encrucijada en la que sólo es posible la captación social de la información y adaptarse a dichos cambios, conforme evoluciona el mundo, ilustrando lo anterior, en la década de los 90's no era posible y nadie se imaginada

que alrededor de 20 años después (año 2010) se pudiera obtener el certificado de tradición y libertad sin salir de casa vía web, ya que en aquel entonces debía desplazarse físicamente a solicitar el documento en la entidad; sale a la luz dicho de otra manera otra justificación del presente escrito, por lo que en este mundo reducido por el avance de los medios, el único camino es avanzar como sociedad. (Roldán, 2003)

Consideremos en este momento, la relevancia de los progresos en informática (hardware-software) y telecomunicaciones en general, asistimos a cambios profundos y acelerados a ritmo exponencial en la forma de producirse las relaciones sociales en múltiples ámbitos como el **trabajo**: teletrabajo, búsqueda de empleo online, la **educación**: tele-formación, cursos a distancia..., el **ocio**: juegos, apps de entretenimiento o relación, las actividades **económicas**: negocios jurídicos sobre bienes o servicios, la **participación política**: la e-administración, democracia digital (sesiones legislativas y demás de corporaciones públicas territoriales completamente virtuales). Situaciones que provocan nuevos fenómenos sociales como la aparición de nuevas formas de sociabilidad digital, y la generación de un nuevo tipo de cultura virtual generada a partir de la interconexión de los medios de comunicación de masas con Internet (Martín, 2018), destacando la relevancia de avanzar en el conocimiento digital jurídico.

Conforme a lo anterior para terminar esta parte introductoria según el Autor Alberto Medina, el siglo XXI nos trae muchos cambios, dentro de ellos la postmodernidad trae consigo, lo que brevemente resumiremos como la forma en la que evolucionan todos los aspectos de la vida en sociedad, tales como: la economía, la cultura, las creencias, las relaciones sociales, y por ende el derecho, el cual por pujanza de dicha modernidad les reclama a los juristas no quedarse atrás, para que den vía libre a su instinto imaginativo y se busque solución a los problemas actuales del derecho frente a la modernidad, y no se torne obsoleto basado en tecnicismos y trámites engorrosos que no tienen como principio buscar solución a los problemas de los ciudadanos, sino hacer que las actuaciones sean susceptibles a dilatarse. (Medina M. A., Retos y perspectivas del derecho administrativo. Segunda Parte , 2009)

Capítulo I: Estructura del expediente digital

1.1 Estructura y componentes del expediente administrativo tradicional

Avanzando en el presente razonamiento, para comprender las características del expediente administrativo tradicional, este está definido en la ley 1437 de 2011, en su artículo 36:

Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad.

Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la entidad u organismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas se opone a la acumulación, podrá acudir, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias administrativas.

Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el carácter de reservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado.

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y a obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el artículo 14. (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 2011).

Por consiguiente se infiere que los elementos del expediente administrativo tradicional son todos los documentos físicos tangibles, es decir a manera de ejemplo: la solicitud de solución a un problema jurídico de un ciudadano, la respuesta emitida por la autoridad, el recurso si el actor dispone de este, y así mismo se va construyendo hoja a hoja el expediente, en vela de que la autoridad pueda verificar la línea de tiempo de la actuación para no faltar a la congruencia, por consiguiente si se realizare la actuación ante diferentes entidades, la primera será que la que realizará el archivo de los documentos. Ahora, se puede comprender el expediente como la ruta dentro de una actuación pública. Evidenciando su estructura, es decir

lo que la conforma que en este caso sean sus componentes que deben ser entendidos como el paso a paso que va siendo archivado por la autoridad.

1.2 Estructura y componentes del expediente administrativo electrónico

Ahora después de comprender la estructura tradicional del expediente administrativo nos adentraremos en la conformación del digital, para ello debemos remitirnos al capítulo IV utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, de la ley 1437 de 2011. En su artículo 59 define lo que es un expediente electrónico, modificado por ley 2080 de 2021:

Artículo 59. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.

El expediente electrónico deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad.

La autoridad respectiva garantizará la seguridad digital del expediente y el cumplimiento de los requisitos de archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley.

Las entidades que tramiten procesos a través de expediente electrónico trabajarán coordinadamente para la optimización de estos, su interoperabilidad y el cumplimiento de estándares homogéneos de gestión documental. (Ley 2080, 2021).

Estudiado lo anterior podemos extraer que la ley garantiza la utilización de las tecnologías dentro de la administración pública, ahora estipula presupuestos para que se surta dicho expediente, empezando por el requisito de que el foliado de los documentos deberá ir firmado digitalmente por la autoridad, lo que garantizara la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación, afirmando también que la autoridad tendrá una copia de seguridad del mismo. Prosigamos nuestro análisis desde el punto de vista de la seguridad que deben tener dicho expediente, lo que nos remite a pensar en la integridad, autenticidad y disponibilidad de la información electrónica, la cual está desarrollada por la ley 527 de 1999, ley que solo enunciaremos debido a que se desvía del objeto de nuestro presente estudio sin

que deje de ser importante para el presente escrito. Eso sí aclarando que esta prevé y garantiza la utilización de firmas digitales como las entidades de certificación. (república, 1999)

El siguiente punto a tratar es la concepción objeto del presente trabajo, el cual es contrastar las etapas del proceso administrativo encaminando a su aplicación electrónica, de esta manera una vez agotadas las etapas previas al proceso como el cumplimiento de la firma digital, como quedo expuesto anteriormente se procederá a la asignación en línea del asunto, ahora surtida la aceptación se procederá si es el caso, la notificación por medios electrónicos, conforme al CPACA, dejando constancia de la actuación, posteriormente se adelantaran las diligencias y pruebas, lo que conforme a la modernidad de la infraestructura actual se podrán realizar a través de sesiones virtuales por medio de video conferencia, creando así documentos electrónicos que dan vida al expediente digital, finalmente dentro del proceso se procederá a emitir decisión, la cual en todo caso será proferida y almacenada en medios electrónicos, así mismo si proceden recursos se realizaran por el mismo camino, siguiendo esta ruta se puede evidenciar el paso a paso de la creación del expediente digital de manera general, lo anterior lo afirman juristas de la Pontifica Universidad Javeriana (Gloria Edelcy Ferro García, 2018), igualmente la nueva ley 2080 de 2021, en su artículo 83 destaca aspectos importantes para nuestro estudio, como los son la dotación para los juzgados en cuestiones tecnológicas y la creación de herramientas digitales al servicio de la comunidad para materializar los procesos en línea.

1.3 Estructura de la política de gobierno digital

En virtud del decreto 1078 de 2015 (Decreto, 2015) se incorpora al marco jurídico nacional los lineamientos para el uso y explotación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo anterior en búsqueda de ser una nación con eficientes aptitudes digitales. Los pilares fundamentales de esta política son: **TIC para el estado:** Se fortalecerá la capacidad operativa de las entidades públicas, como también el trabajo mutuo unificado entre entidades. **TIC para la sociedad:** Busca general confianza en el pueblo Colombiano para que la ciudadanía interactúe con la administración a través de canales digitales, esto con la participación mutua en la innovación y creación de productos y servicios para la solución de problemas sociales. **Habilitadores Transversales de la Política de Gobierno Digital:** Promueven la seguridad de la información, arquitectura y servicios ciudadanos digitales,

materializando los postulados anteriores y llevando a la política digital a cumplir sus objetivos. **Lineamientos y estándares de la Política de Gobierno Digital:** Encontraremos los requisitos mínimos para poder participar y desarrollar la utilización de la presente política. **Propósitos de la Política de Gobierno Digital:** A través de la presente política la ciudadanía podrá utilizar servicios tecnológicos a la vanguardia de la modernidad, siendo estos procesos seguros y eficientes, como el aprovechamiento de datos e información exacta, para llegar al avance tecnológico nacional desde los departamentos y las ciudades.

Por último, la anterior política será implementada de acuerdo al manual de gobierno digital, aplicado por las entidades públicas, presentado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación.

1.4 Descongestión y celeridad judicial y administrativa

Así mismo se debe tener en cuenta la descongestión en los juzgados y actuaciones ante entidades públicas ya que es de conocimiento general que estos lugares están saturados de miles de procesos que duran largos tiempos es finiquitarse, consideremos ahora las elevadas cifras de congestión, relata El Tiempo, según un informe de la Contraloría General de la Republica, que en Colombia de cada 100 procesos judiciales en 2019, 50 quedaron pendientes para el año 2020, es decir el índice de congestión del año inmediatamente anterior es del 50,75 por ciento (Justicia, 2020), lo que nos dice que cada juzgado en el país en promedio lleva un atraso en el impulso de sus diligencias de más de la mitad de su carga laboral anual.

Es por esto que es viable y menester por parte de los gobiernos encaminar inversión de tecnología para la administración pública y la justicia, debido que gracias a la telemática, gran parte de esa congestión se puede evitar, para poder que surjan las actuaciones a la distancia y con los mismos efectos jurídicos, materializando la anterior directriz se desarrolla a través de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas al ofrecer las mejores condiciones para alcanzar dichos objetivos, porque se surte con celeridad, tramites como la notificación, audiencias, etc., si estos se hacen por medios electrónicos, para llegar al proceso general electrónico (Sanchez, 2014)

Ahora veamos lo que se debe desarrollar para obtener dicha celeridad, para ello hablaremos de la idea de una cuarta generación de derechos, concebida como el claro reconocimiento a determinadas prestaciones y accesos mínimos a las redes de la comunicación, especialmente a Internet, como espacio público global, estos a su vez materializados en aspectos puntuales para asimilar lo que significa la cuarta generación:

1) acceso a las tecnologías que permitan el intercambio libre de ideas; 2) el derecho a acceder a las infraestructuras sin importar el Estado donde se vivía; 3) el derecho a tener los conocimientos para usar Internet y adaptar el ciberespacio a necesidades particulares; 4) derecho igualitario entre hombres y mujeres, adultos y niños, espacios rurales y urbanos; 5) el derecho a acceder y crear contenidos culturales y lingüísticamente diversos; 6) derecho a la protección de datos; 7) derecho a no estar bajo vigilancia; 8) derecho a contar con un ciberespacio descentralizado, colaborativo e interoperable, con una arquitectura abierta, transparente y accesible (Jairo Becerra, 2015, págs. 39,40)

Cada punto anterior principalmente abarca los cimientos o principios que debe tener presente el estado para poder cumplir el postulado objeto del presente escrito.

1.5 Desafíos y Beneficios de la implementación de medios electrónicos

Desde la quinta revolución industrial con la aparición de las tecnologías, la vida ha sido menos compleja, evidentemente el marco jurídico no se va quedar atrás, por lo que es emitente que un futuro la mayoría de las actuaciones que se realizan físicamente hoy, el día de mañana se realizaran a kilómetros de distancia y teniendo la misma validez, por lo que el presente escrito no es más que un intento para comprender y desde la teoría llevar a cabo los futuros lineamientos que regularan esta actividad, para comprender mejor este postulado basta con adentrarse en la plataforma de Servicio Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) la que hace de público conocimiento el cumplimiento de los actos contractuales, como también toda la interacción de los sujetos Estado contratante y contratista, suposición que sería impensable hace unos años.

Lo anterior es exactamente lo que desarrolla este escrito pero en las actuaciones judiciales y administrativas de la actuación pública. Cabe resaltar que dentro de sus ventajas estarían:

Trámites descentralizados: Ya que no sería necesaria la presencia física de la persona, ni del funcionario público en la entidad o juzgado para realizar un trámite, debido a que la documentación electrónica puede ser consultada de manera online, con lo que se agilizan mucho las tareas y permite comprobar en tiempo real cualquier dato que se necesite. **Expedientes con validez legal:** Gracias a tecnologías como el cifrado de los datos y las firmas electrónicas, un expediente electrónico puede llegar a tener la misma validez que uno equivalente en papel. **Sencillez en la localización:** Al estar todo clasificado y accesible, es muy sencillo buscar información de manera casi instantánea. **Seguridad adicional:** Las limitaciones del papel (extravío, deterioro, ilegibilidad...) no existen en los expedientes electrónicos, que pueden ser copiados y asegurados según la necesidad, no se extravían y es más cómodo para el ciudadano y la administración relacionarse. Así mismo se debe tener en cuenta la descongestión en los juzgados y actuaciones ante entidades públicas.

Por otro lado, teniendo claro los aspectos positivos pasamos a aquellos que se deben entender como retos para los gobiernos y ciudadanos, partiendo inicialmente de que en la actualidad a pesar del esfuerzo de algunas políticas públicas que buscan implementar la tecnología en los procesos jurídicos no debemos negar esa realidad tangible la cual se trata del reducido grado de modernización que puede encontrarse en las actuaciones de los abogados en Colombia, de esta manera el primer paso a seguir debería ser la creación y regulación de sistema de almacenamiento y registro electrónico para actuaciones jurídicas en línea, posteriormente es necesario que dichas aplicaciones o servidores estén disponibles siempre que se necesiten, lo que crea otro reto si hablamos de accesibilidad y analizamos algunas zonas de Colombia que aún están alejadas totalmente de tecnología o internet.

Capítulo II Marco jurídico Colombiano para la implementación del expediente digital en la administración pública colombiana

2.1 Marco constitucional para el expediente administrativo digital

Principiando, es menester comprender el marco constitucional que da las bases para que se pueda desarrollar la aplicación de las tecnologías en el expediente administrativo, para esto se debe saber que los expedientes están conformados por diferentes documentos que generan información, lo que nos lleva a pensar, el tratamiento que debe tener dicha información, por

consiguiente el artículo 20 de la constitución política de Colombia establece: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” (Constituyente, 1991) Ahora, de lo anterior se infiere que se garantiza que toda persona tiene derecho a informar y recibir información veraz e imparcial. El anterior postulado tiene carácter vinculante para la administración, esta se define como la libertad de disposición de información de índole personal o privada y el acceso a toda la información de carácter público en manos de la administración, así lo afirma el doctrinante Sánchez Acevedo (Acevedo, 2016), entendido lo primero, cabe señalar que al ser respaldada constitucionalmente el uso legítimo de la información en manos de la administración, esta posteriormente pasa a conformar los expedientes sean físicos o electrónicos, lo cual da un primer vistazo de la trascendencia que es implementar la utilización de tecnologías para circular la información jurídica en los procesos judiciales y administrativos.

Retos de los servidores públicos en plataformas digitales

Para hablar sobre el presente punto es necesario partir de la noción, de las edades de la mayoría de los servidores públicos más exactamente a nuestro estudio los jueces y trabajadores de la administración, debemos reconocer que son personas cuya formación académica en promedio se dio antes del año 2000, es decir finalizando el siglo XX, recordemos que en ese momento histórico la tecnología no tenía el boom que obtuvo años después, con la evolución exponencial de las comunicaciones, lo que no nos puede llevar a afirmar que el simple hecho de formarse en ese periodo de tiempo, hace desconocer involuntariamente el óptimo manejo las tecnologías de la información, no obstante hay abogados que se mantienen a la vanguardia, realizando cursos y tienen un manejo aceptable de la tecnología, pero quizás una buena parte de estos juristas no cuentan con dicha formación, lo que al enfrentarlos a un sistema jurídico basado en programas digitales jurídicos y estos a su vez en algoritmos y/o servidores en línea constaría un poco de trabajo presidir actuaciones completamente virtuales, por otro lado debemos aceptar que hasta el día de hoy la utilización de tecnología se ve reflejada en muchas cosas menos en los múltiples

supuestos planteados ante los juzgados y ante algunos órganos administrativo, constatamos que hasta la fecha la cuestión relativa a la calificación jurídica de la prestación del trabajador en línea es nula y en cambio las plataformas se han centrado en el trabajo por demanda vía app a través de una plataforma digital para realizar trabajos o servicios o tareas off line tradicionales y localizados geográficamente (servicios tales como el transporte, el reparto de bienes, servicios de limpieza o de reparación, domicilios, entre otros) requeridos por clientes, usuarios y/o empresas. (Celia Ferrero Romero, 2018). De lo anterior inferimos que pese a que la tecnología está en todas partes en nuestro diario vivir, no ha llegado con la misma fuerza a todos los campos laborales, como el de nuestro estudio, lo que quiere decir que evidentemente algunos profesionales tendrán dificultades con la aplicación de la telemática jurídica pero con el paso de los años dicha problemática disminuirá, y en lo que se deben centrar los gobiernos es desarrollar dichos programas jurídicos como mencionaremos más adelante.

Prosiguiendo nuestro análisis debemos entender un Software como “La parte intangible de una computadora, está formado por el equipo lógico informático y son los programas ejecutados por un sistema informático, comprende formas simbólicas y ejecutables para dichos programas. El software está constituido por una serie de programas que permiten la realización de las órdenes que el usuario emite y que ejecuta operaciones aritméticas y booleanas, vigila el estado de entradas y salidas; el banco de memoria y los controladores para dispositivos internos y externos.” (Salgado, 2015) Lo anterior tiene relevancia debido a que son dichos programas los que se deben implementar al mundo jurídico para brindar su operatividad al servicio de la administración pública.

2.2 Marco jurisprudencial colombiano para el expediente administrativo digital

De igual modo la Corte Constitucional en sentencia T-040/13 dogmatizo lo siguiente “Es un derecho fundamental de doble vía, que garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir la información veraz e imparcial. Así mismo, la libertad de información supone la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para difundir lo que se quiere emitir.” (Corte Constitucional , Sentencia T- 040, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 28 de enero de 2013). Ahora puedo decir que dicha infraestructura en la actualidad y observando el futuro de las actuaciones jurídicas, es donde se debe materializar la aplicación de las tecnologías en

el expediente digital, para que de esta manera las personas con un interés legítimo en los procesos, puedan acceder eficaz y oportunamente a la información contemplada en los expedientes electrónicos en donde versen sus derechos.

Algo semejante a lo anterior ocurre cuando se habla en el marco del estado social de derecho, donde el juez, en su papel de administrador de justicia, cumple una función preponderante, pues le corresponde ser el director del proceso y utilizar los mecanismos a su alcance para proferir una decisión de fondo de manera oportuna. Por esto, los códigos de procedimiento, han impuesto una serie de deberes, dentro de los que se encuentran: dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación y procurar la mayor economía procesal, así como dictar las providencias dentro de los términos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, al respecto de lo anterior la Corte constitucional afirmó: “los jueces de la República son los primeros llamados a ejercer una función directiva en la conducción de los procesos a su cargo, para lo cual el legislador les ha otorgado la potestad de asegurar, por todos los medios legítimos a su alcance, que las diferentes actuaciones se lleven a cabo.” (Corte Constitucional, Sentencia C-086, MP: Jorge Iván Palacio Palacio, 24 de febrero de 2016). Cuando la corte dice que les ha otorgado la potestad, reitera que disponen de diferentes medios legítimos para llevar las actuaciones, lo cual analógicamente se contrasta con la primera parte de este capítulo, en el sentido que los jueces disponen de todos los medios, beneficios y facilidades que brinda la tecnología hoy en día para surtir oportunamente el proceso, para que de esta manera se vea oportunamente la materialización perfecta de un expediente digital.

2.3 Gestion documental del Archivo General de la Nación

Del patrimonio documental con el que contamos los Colombianos, se destacan varios aspectos relevantes a la hora de hablar del expediente digital, empezando por delimitar aspectos que debe iniciar el gobierno para acercarnos cada vez más a la digitalización de la justicia, como lo es: facilitar el acceso a los ciudadanos, impulsar el desarrollo de servicios para los ciudadanos, impulsar el intercambio de información y operatividad entre entidades públicas, reorganizar internamente el servicio público en función de la era digital;

pensamientos completamente eficaces y necesarios para lograr el objeto del presente trabajo. (Nación, 2015)

Materializando la anterior postura encontramos los elementos del expediente digital según la documentación del Archivo General de la Nación.

Documentos electrónicos de archivo: Se entiende que estos son la acumulación de documentos relacionados entre sí, cuya afinidad es fruto las actuaciones de una persona, un área o una dependencia, en función de un mismo asunto. Los cuales también pueden ser divididos en series o subseries.

Foliado Electrónico: Consiste en la vinculación de un documento a un orden denominado índice que permite ser ubicado de forma rápida, garantizando integridad autenticidad y disponibilidad, el cual deberá ser suscrito por la persona o entidad que sea su custodio, las entidades se deberán señor a los siguientes requisitos para foliar su información:

1. Identificación consecutiva del documento dentro del expediente acorde con el tipo de ordenación que se elija.
2. Identificación inequívoca del documento
3. Metadato(s) que asocie el documento al expediente
4. Metadato(s) que identifique que el documento es Original o Copia

Índice electrónico: Este se conforma por un mecanismo digital que facilita la identificación de los documentos electrónicos que componen el expediente, aclarando su disponibilidad, ordenados cronológicamente, salvaguardando su integridad y su eventual recuperación. De forma general el índice electrónico deberá garantizar:

A) Permitir la identificación de la totalidad de los documentos que conforman un expediente. B) Permitir la identificación de la secuencia de los documentos y el orden dentro del expediente electrónico. C) Garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir la recuperación de sus documentos y metadatos. D) Garantizar la preservación a largo plazo de los datos y metadatos que conforman el índice electrónico. (Palencia, 2017, pág. 50)

Firma del índice electrónico: El Archivo General de la Nación, indica que el índice electrónico se deberá firmar digitalmente al cierre del expediente, de igualmente indica que cada vez que se le adicione algún documento al expediente, este deberá llevar la firma al cierre del mismo.

Metadatos: Hablando de los documentos electrónicos de archivo como los expedientes, requieren de metadatos mínimos obligatorios para su efectiva utilización, durante su tiempo en servicio.

2.4 Derecho internacional

Partiendo de las bases de la jurisprudencia, la constitución y la ley desarrollan sobre el expediente digital, nos adentraremos en el marco internacional, en comunidades tal vez más avanzadas en la tecnología jurídica como lo son algunos países Europeos. Para ello escudriñaremos como ha impactado en España la tecnología en diferentes áreas del derecho.

Inicialmente la telemática transforma el derecho obligando a los países a modernizar su ordenamiento jurídico, es por ello que el autor Jose Bocanegra relata desde su perspectiva, que en los últimos años, han ido surgiendo nuevas normas jurídicas con el fin de establecer un nuevo marco jurídico. Y esta necesidad de una nueva legislación ha afectado con distinta intensidad a todas las ramas del derecho tanto público como privado.

Así, ha debido modificarse y completarse a fondo el derecho penal para hacer frente a los nuevos retos y desafíos para la sociedad ha supuesto el fenómeno delictivo conocido como la ciberdelincuencia con esta finalidad se ha introducido en el código penal distintos proyectos para proteger una serie y bienes jurídicos principalmente y en primer lugar el derecho a la intimidad personal al honor a la propia imagen y a la jurisprudencialmente creado el derecho fundamental a la autodeterminación informativa y en un segundo lugar la protección de los derechos de propiedad de los bienes informacionales lo que ha supuesto desde la revisión del año 1995 la introducción de dos nuevos títulos en el código penal así como la modificación de otros ya existentes.

También el Derecho civil y mercantil están en profunda revisión, se hace un nuevo paradigma socio económico en el que cada vez mayor volumen de transacciones sobre todo económicas

se realizan por medios telemáticos perspectiva en la que han tenido especial importancia de la ley 34 de 2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico la ley 56 de 2007 de medidas de impulso de la sociedad de la información así como la ley 24977 al mercado de valores tampoco podemos dejar de mencionar la nueva normativa en muchos casos de carácter reglamentario que afecta a distintos tipos de registros civiles y mercantiles con el fin de conseguir precisamente su adaptación a la sociedad de la información.

En lo que se refiere a derecho laboral debemos analizarlo desde dos perspectivas desde el punto de vista de las relaciones laborales que también está sufriendo una profunda evolución sobre todo por vía jurisprudencial al haberse convertido las nuevas tecnologías en herramientas de trabajo de un número cada vez mayor de ciudadanos y desde la perspectiva del derecho de la seguridad social en el que en los últimos años se ha desarrollado una amplia teoría normativa que ha propiciado la total automatización de la gestión de la misma.

Pero ha sido en el derecho financiero y tributario en el que la realidad ha abierto la puerta de la Administración electrónica en España inicialmente mediante normas reglamentarias que al tener una Clara incidencia de la Administración electrónica se estudia en el cuerpo de esta obra y desde el punto de vista legal con promulgación de la ley 58 2003 general tributaria y con las modificaciones de las leyes especiales dedicadas a cada impuesto (José Manuel Bocanegra Requena, 2011)

Ahora, el expediente digital, Según la legislación Española se encuentra trabajando el documento electrónico debido a que no se ha avanzado mucho en el aspecto de software jurídicos, se podría decir que se encuentra en la misma fase de Colombia, al reconocérsele a sus ciudadanos posibilidades tales como el establecimiento del derecho de los ciudadanos a no tener que presentar documentos con datos que las administraciones ya tienen en su poder, como también la obligación de la Administración a aceptar documentos electrónicos presentados por los ciudadanos, también la validez administrativa del documento electrónico y por último el reconocimiento de una firma electrónica o instrumentos alternativos para relacionarse con cualquier administración de forma digital, todo aquello gracias a la ley española 11/ 2007 denominada Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAEOSP), es así que se demuestra la similitud en el camino de la virtualidad española como en el caso nacional, al reconocérsele derechos básicos de uso de la tecnología

a los ciudadanos, no obstante falta camino por construir hacia una justicia telemática, sin embargo la misma ley mencionada anteriormente da los primeros pasos estableciendo los requisitos para el empleo de medios informáticos en el procedimiento administrativo, aspectos que deben conocerse,. Así, debe identificarse con garantías al órgano autor del documento. Es necesario, en segundo lugar, **que previamente se aprueben por el órgano competente los programas y aplicaciones electrónicas, informáticos y telemáticos que vayan a utilizarse por las Administraciones públicas.** Garantizando la autenticidad, integridad y conservación, así como, en su caso, la recepción por el interesado, de los documentos así emitidos. Ciertamente el procedimiento administrativo es el medio de garantía de los derechos de los administrados, cuyo fin es asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general. (Modesto J. Fabra Valls, 2008) Se pudo evidenciar que ya se tiene la iniciativa en desarrollar programas jurídicos al servicio de la administración.

Ahora, pasando de España a Alemania. Partiremos de la ley que rige su procedimiento administrativo la cual es la Drittes Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrenrechtlicher Vorschriften (Ley federal que regula el procedimiento electrónico , 2002). Inicialmente estipula al igual que en el caso colombiano que el ciudadano debe tener un canal virtual para realizar las actuaciones con el estado, y este a su vez debe confirmar explícitamente la aceptación de realizar trámites por el mismo, es decir no es lo mismo tener una dirección web a reconocerla como “buzón” jurídico.

Capítulo III Analizar los elementos estructurales y de desarrollo para la implementación del expediente digital en la administración pública en Colombia.

3.1 Futura regulación de la abogacía a través de medios digitales

Por lo que se refiere a una regulación del derecho, antes que nada se debe partir de nociones básicas necesarias para digerir conceptos más especializados por lo que entenderemos que se debe tener una buena administración pública para pasar al siguiente paso de la virtualidad, dicha buena administración a veces es permeada por intereses particulares de los gobernantes, para ellos analizaremos lo que para el autor Delpieazzo significa que un país sea dirigido bajo una buena administración:

La adecuada elección de medios y de la oportunidad de ejercicio de las competencias con relación al fin específico que se quiere satisfacer. Se trata de una nota propia de la función administrativa, ya que la misma debe cumplirse de la forma más oportuna y más adecuada para la obtención de los fines objeto de la función pública. (Delpieazzo, 2011, pág. 24).

Por consiguiente si buscamos una buena digitalización de los trámites administrativos, bajo el anterior predicado el estado colombiano debe invertir recursos económicos, científicos y tecnológicos en el mejor desarrollo posible de esta idea.

Con respecto a este punto se debe conocer el impacto de la informática en el mundo del derecho para que de esta base poder conceptuar lo que seria los lineamientos jurídicos en un mundo cada vez más digital, dicho lo anterior los avances tecnológicos y, en especial, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) según el autor Pinto (Palacios, 2017) cambiaron los comportamientos sociales y la forma de relacionarnos con el entorno. La globalización de Internet ha provocado enormes cambios en todos los ámbitos de nuestra vida. El acceso a la mano en cualquier parte del mundo a un gran volumen de información ha cambiado nuestra manera de adquirir conocimientos. Gracias al correo electrónico, la comunicación se ha vuelto prácticamente instantánea, salvando las distancias terrestres que tradicionalmente tenían que recorrer las cartas hace no mucho tiempo. Por otro lado, las empresas han trasladado su centro de negocio al mundo virtual a fin de dotar de presencia universal a su proyecto empresarial gracias a la posibilidad de dirigirse a un número indeterminado de posibles consumidores. No sin razón se ha llegado a decir que las empresas que no tengan presencia en Internet perderán competitividad

El siguiente punto desarrolla la importancia de la operatividad y funcionamiento de los servidores jurídicos que ponga a disposición el gobierno para los ciudadanos, es decir el estado debe velar y garantizar eficazmente la prestación continua e ininterrumpida y por supuesto que cumpla a cabalidad la finalidad con la que se puso en servicios dicho sitio web, lo que quiere decir que puede existir responsabilidad de operador al que se le delego el funcionamiento de aquel portal, en ese orden para terminal esta idea, si la causa del problema es imputable al operador, de acuerdo a la norma de normas, el artículo 90 de la Constitución Política, el estado podría verse inmerso al en un caso de responsabilidad de daño antijurídico

materializado en la mala práctica del operador de sitio web, lo que a través de una omisión de la administración podría devengar en una serie de perjuicios para los administrados. Lo anterior de acuerdo al jurista Alberto Restrepo (Medina M. A., 2017)

A lo anterior se debe sumar los grandes retos que tendría el estado al implementar como lo es, desarrollar los tramites virtuales de la forma más minimalista y sencilla posible esto debido a que se debe tener en cuenta que va a estar al servicio de toda la comunidad de lo que se infiere que no todos podrán contar con aptitudes para desenvolverse y aprovechar al máximo dichos servidores, por lo que en consecuencia cada página que brinde tramites virtuales debería incluir un instructivo pedagógico, didáctico y de fácil comprensión donde indique el paso a paso de cada trámite para que de alguna u otra forma sea más fácil para la persona mirar cómo debe realizar el trámite y poder realizarlo autónomamente (Barahona, 2017).

Conforme a lo anterior no solo se puede anunciar un servicio virtual funcional, sino también prever la seguridad en dichas actuaciones, para ello me permito traer a colación al tradicional autor Antonio Fernández, estudioso que desarrolla el concepto de:

Seguridad jurídica: se refiere a las situaciones concretas de los particulares dentro del orden del Derecho, Este debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en todo momento sepa con claridad hasta dónde llega su esfera de actuación jurídica y dónde empieza la de los demás; que conozca con plena certeza a lo que le compromete una declaración de voluntad y, en general, las consecuencias de cualquier acto que el o los otros realicen en la órbita del Derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados de la aplicación de una norma; en fin, que en todo instante pueda contemplar, deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y ajenos. (Galiano, 1989, pág. 27)

Teniendo en cuenta lo anterior para nuestro presente estudio puede verse, entonces, que la seguridad jurídica esta principalmente ligada a la certeza y estabilidad jurídica que pueda brindar un determinado ordenamiento respecto a ciertas circunstancias o situaciones. Esa certeza a su vez, se concreta en la certidumbre que debe tener todo sujeto de derecho respecto a una determinada decisión o desenvolvimiento del tráfico jurídico en situaciones concretas

lo que quiere decir que el estado debe garantizar a los ciudadanos que decidan autónomamente utilizar servidores jurídicos para llevar a cabo sus actuaciones no se le causara un agravio por dicha decisión.

Ahora, la importancia del internet debido a ser uno de los ejes centrales del presente escrito, según Helena Alviar docente del área de derecho público de la universidad de los Andes a medida que crece el porcentaje de personas con acceso a internet aumentan las posibilidades de que más personas puedan beneficiarse de más y mejores servicios del Estado por medio de la tecnología y las redes de comunicación. Esto, desde luego, no es algo automático ni sólo depende de incrementar la tasa de penetración de la población a internet. También dependerá de que el Estado haga un uso adecuado, estratégico e inteligente de internet y las TIC para cumplir sus cometidos. Las cifras muestran el aumento importante del número de personas con acceso a internet. En enero del 2016 la tasa mundial de penetración de usuarios fue del 47%¹⁶ aproximadamente, es decir alrededor de 3336 millones de personas. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, el 55,9%¹⁷ de la población tiene acceso a internet, y Colombia cuenta con una tasa de penetración de internet del 59,5%¹⁸ (unos 27 millones de colombianos). Por lo cual el estado debe velar inyectar más recursos a la propagación del servicio de internet a nivel nacional, si quiere aprovechar al máximo los beneficios de implementar un modelo de expediente basado en la tecnología. (Garcia, 2016)

Por ultimo cabe señalar que, no basta con la adopción por parte del Estado de las reglas que definan el modelo jurídico de actuación de la administración pública virtual, que es funcional a la globalización, sino que es importante crear las capacidades institucionales necesarias para dirigir debidamente el sistema regulador y que demandan su propia institucionalidad de producción en orden a responder efectivamente a los requerimientos de acceso a los servicios básicos por parte de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, es decir se podría crear toda una institución dedicada exclusivamente al funcionamiento virtual del estado y conforme la judicial como lo afirma Manuel Restrepo. (Medina M. A., Globalizacion del derecho administrativo, estado regulador y eficacia de sus derechos , 2012)

3.2 Representación electrónica de ciudadanos

Para entender lo que trasciende el concepto de representación electrónica es necesario comprender el modelo de administración electrónica como el uso y la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de resolución de conflictos al servicio de la comunidad. (Tomás de la Cuadra Salcedo, 2018)

El cambio tecnológico que estamos viviendo anuncia una transformación disruptiva en los modos y formas de entender en un futuro próximo la idea de trabajo. Estamos en una época caracterizada por una aceleración que nació, precisamente, con la incorporación de la máquina como elemento esencial del sistema productivo y cuya evolución se ha caracterizado por un desarrollo progresivo en el que cada proceso tecnológico ha sido más potente y veloz que el anterior

Lo que supone como para todas las áreas laborales desde la más sencilla a la más compleja, una adaptación de la misma a la era digital, lo que para nuestro estudio trasciende además de la implementación de servidores o plataformas jurídicas, la adaptación de los juristas a dicho cambio, el cual conlleva que las actuaciones que se conocen hoy en día, no serán iguales y serán obsoletas, para ilustrar mejor la anterior postura, supongamos que la defensa técnica como la conocemos hoy en día pasa a un segundo plano con la nueva forma de realizarla, esto es el abogado conocedor de plataformas jurídicas dispuestas por el estado, las utiliza a cabalidad, aprovechando el 100% de dicha utilidad, lo cual se materializa cuando utilizan las tecnologías de la información.

Asunto parecido se evidencio con los efectos que la pandemia del COVID-19, causo en el sistema judicial y administrativo Colombiano, lo anterior debido a que el presidente de Colombia Iván Duque en uso de sus facultades extraordinarias en ocasión al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional expidió el decreto legislativo número 806 del 04 de junio de 2020, el cual adopta medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, sin embargo recordemos que estas disposición tienen la misma duración que la emergencia decretada en el país. (Decreto Legislativo , 2020)

Precisamente es menester mencionar el anterior decreto debido que su contenido desarrolla de forma muy precaria la inclusión de las tecnologías y en el mismo reconoce una representación y actuación en los procesos de forma virtual, enfatizamos de una forma muy sencilla debido a que esto es una medida transitoria para sobrellevar la crisis actual, pero en el fondo su contenido se asemeja a un bosquejo o las bases para dar vida a una actuación jurídica virtual desarrollada a cabalidad, no de forma temporal sino permanente, donde se debe estructurar, planificar y plantear detalladamente la actuación administrativa o judicial, para poder llegar a una verdadera actuación judicial virtual.

3.3 Autenticidad, integridad y disponibilidad del expediente digital

Dichos elementos son las características esenciales de los documentos que conforman el expediente digital, los cuales son abordados por la ley 2080 de 2021, igualmente el decreto 620 de 2020 (estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales), y finalmente la doctrina emitida por el Archivo General de la Nación, ahora se deben entender:

Autenticidad: Es el atributo generado en un mensaje de datos, cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, emitido, firmado. O cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el mensaje de datos.

Disponibilidad: Es la propiedad de la información que permite que ésta sea accesible y utilizable cuando se requiera.

Integridad: La condición que garantiza que la información consignada en un mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición autorizada de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. (Decreto 620, lineamientos generales en el uso y operación de los servicios digitales. Min TIC, 2020)

Ahora, según el Archivo General de la Nación:

Autenticidad: Entendida como el efecto de acreditar que un documento es lo que pretende ser, sin alteraciones o corrupciones con el paso del tiempo. Es uno de los

componentes que conforman la confianza del documento respecto al contexto, estructura y contenido.

Disponibilidad: Entendida en un documento electrónico, como la capacidad actual y futura de que tanto el documento como sus metadatos asociados puedan ser consultados, localizados, recuperados, presentados, interpretados, legibles, y por tanto estar en condiciones de uso.

Integridad: Entendida como la cualidad de un documento para estar completo y sin alteraciones, con la cual se asegura que el contenido y atributos están protegidos a lo largo del tiempo. Es uno de los componentes que conforman la confianza del documento. (Palencia, 2017, págs. 11-23)

Por consiguiente de las dos posturas anteriores podemos manifestar para conceptualizar los términos que la Autenticidad es la cualidad en el documento que da fe que el documento que se va a utilizar, es lo que muestra ser, ejemplificando: se puede entender cuando un ciudadano se identifica por su cedula de ciudadanía, el documento al utilizar diferentes mecanismo de seguridad como: Estampas de tiempo, firmas electrónicas, firmas digitales, certificados digitales, código de seguro de verificación y marcas de agua digitales, y estos al igual que la cedula de ciudadanía dan fe de que el documento acredita su composición y contenido sin llegar a tener alteraciones de ningún tipo. Así mismo la Disponibilidad consiste en que la información debe estar disponible para consulta presente y en el futuro independientemente del sistema que la produjo, su estructura o medio de registro original, por lo cual las entidades tienen diferentes mecanismos como: Plan de respuesta a incidentes y plan de continuidad del negocio, acuerdos de niveles de servicio, gestionar la capacidad, la operación y el soporte de los servicios tecnológicos, prevención de ataques de denegación del servicio, entre otros, gracias a estos mecanismo nos encontraremos frente a documentos que gozan de ser consultados en cualquier momento por la autoridad que lo requiera.

Finamente frente a la Integridad encontramos que su figura esencialmente centra su función es salvaguardar el contenido del documento para que este solo sea conocido por las personas que tienen la autoridad para hacerlo, en la mayoría de los casos el remitente y el destinatario, para evitar que terceros puedan conocer del mismo o alterarlo, para ello las entidades cuentan

con diferentes mecanismos de ayuda como: Políticas y procedimientos para la administración de bases de datos, documentos electrónicos y demás registros de información, integridad personal, responsabilidad, confianza del personal que maneja información sensible de la organización, medidas de protección para evitar la pérdida o corrupción de los documentos de archivo y los medios de almacenamiento..., gracias a ello se podrá evitar que se filtren o alteren documentos, salvaguardado la utilidad de los expedientes digitales. (Palencia, 2017)

Conclusiones

Como se evidencio a lo largo del texto diferentes leyes le han brindado la posibilidad a la administración pública Colombiana que esta realice su trabajo de una forma más sencilla y moderna, utilizando el internet, para que los ciudadanos puedan interactuar con el estado de una forma fácil, eficiente y segura. Diferentes mecanismos y postulados avalados por variedad de autores los cuales abogan contundentemente por la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para que se permita un completo cambio en la forma como se realizan actuaciones, aplicando la E-administración, las administraciones públicas inteligentes y el uso del gobierno digital.

El principal mecanismo es el expediente digital, anteriormente establecidos los presupuestos para entender cómo se aplica la tecnología al funcionamiento de la administración pública, como también determinadas las características propias del expediente administrativo tradicional y digital, nos lleva a predicar el avance de la tecnología al servicio de los ciudadanos, como lo son los derechos de cuarta generación, la posibilidad de ser representado electrónicamente por un abogado o la validez de pruebas digitales.

Ahora bien, se infiere que el expediente tradicional como el digital en su contenido es el mismo y lo trascendental es la forma como se almacena la información, como también la observación del cumplimiento de las etapas de los procesos a través de medios digitales, lo que en ultimo hace que la vida en relación con la sociedad sea más fácil, ya que hoy en día es necesario realizar actuaciones con una entidad sin desplazarse físicamente a su sede, lo que se demostró que no deberá ser necesario en un futuro cercano.

Aproximaciones como el decreto temporal emitido por el Jefe de estado, son fieles pruebas de que el expediente digital será una realidad, por lo tanto el estado colombiano debe trabajar incansablemente para que todo lo expuesto en el presente escrito se materialice en la realidad, para ello al crear una institución reguladora y operadora del Sistema Jurídico Virtual Colombiano, dará vía libre a las actuaciones digitales entre los particulares y el estado.

Por otro lado se debe destacar que a través de la política de gobierno digital, se buscara la unidad de la nación a través de la virtualidad, lo que quiere decir que se fortalecerá la parte tecnológica operativa del servicio público nacional, para llegar a obtener confianza por parte de los ciudadanos para que estos realicen e interactúen con el estado a través de todos los canales virtuales por los que sea posible, donde se garantizara la seguridad, integridad y disponibilidad de toda la información.

De igual forma se debe reconocer que las modificaciones al CPACA por la ley 2080 de 2021, acercan cada vez más a los ciudadanos a una operatividad judicial y administrativa basada en la digitalización, específicamente al reconocer poder llevar actuaciones, diligencias, y comunicaciones por canales virtuales, todo lo anterior en pro de llevar a la nación a nuevas eras tecnológicas, buscando la eficiencia y aprovechamiento óptimo de las nuevas tecnológicas de la información y comunicación.

Conforme a lo anterior, a todos los anteriores aspectos positivos para la implementación del expediente digital, se suman mecanismos como la autenticidad, disponibilidad e integridad, los cuales son pieza clave para la utilización y generar confianza en el uso de la tecnología y los documentos que se mueven por ella, de igual forma al ser beneficiarios de los anteriores mecanismos se garantiza para los intervinientes que los documentos van a ser lo que

pretenden ser, no han sido alterados en su apariencia y contenido, como también estarán desde su creación siempre disponibles para su posterior consulta.

Bibliografía

Acevedo, M. E. (2016). El derecho a la buena administracion electronica . En M. E. Acevedo, *El derecho a la buena administracion electronica* (págs. 170-171). Bogota D.C: Universidad Católica de Colombia .

Barahona, V. C. (2017). *Derecho digital: perspectiva interdisciplinar* . España: J.M. BOSCH EDITOR .

Celia Ferrero Romero, M. A. (2018). *El trabajo en plataformas digitales: análisis sobre su situación jurídica y regulación futura*. España : Wolters Kluwer España.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Congreso de la República 2011).

Constituyente, A. N. (1991). Constitucion Política de Colombia . Bogota D.C.

Corte Constitucional , Sentencia T- 040, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-040 (Corte Constitucional 28 de enero de 2013).

Corte Constitucional, Sentencia C-086, MP: Jorge Iván Palacio Palacio, C-086 (Corte Constitucional 24 de febrero de 2016).

Decreto, 1078 (El presidente de la República de Colombia 26 de Mayo de 2015).

Decreto 620, lineamientos generales en el uso y operación de los servicios digitales. Min TIC, 620 (Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones 02 de Mayo de 2020).

Decreto Legislativo , 806 (Ministerio de Justicia y del Derecho, Ivan Duque Marquez 04 de Junio de 2020).

Delpieazzo, C. (2011). *Derecho Administrativo General*. Montevideo : Amalio M, Fernandez .

Galiano, A. F. (1989). *DERECHO NATURAL INTRODUCCION FILOSOFICA AL DERECHO*. España: CENTRO DE ESTUDIOS RAMON ARECES.

Garcia, H. A. (2016). Nuevas tendencias del derecho administrativo. En H. A. Garcia, *Nuevas tendencias del derecho administrativo* (pág. 236). Bogotá D.C: Universidad de los Andes.

Gloria Edelcy Ferro García, J. L. (2018). EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO: UN INSTRUMENTO NECESARIO. *EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO: UN INSTRUMENTO NECESARIO*. Bogota D.C, Recuperado de :https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/42416/28_03_2019%20EXPEDIENTE%20ELECTR%C3%93NICO.pdf?sequence=2&isAllowed=y, Colombia: Tesis de Grado.

Jairo Becerra, L. C. (2015). La responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Bogotá D.C: Editorial Universidad Católica de Colombia.

José Manuel Bocanegra Requena, B. B. (2011). *ADMINISTRACION ELECTRONICA EN ESPAÑA, LA. Implantación y régimen jurídico*. España : Atelier Libros.

Justicia. (24 de Junio de 2020). De cada 100 procesos judiciales en 2019, 50 quedaron pendientes. *El Tiempo*, págs. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/contraloria-revela-cifras-de-congestion-judicial-en-el-pais-521784>.

Ley , 1437 (Congreso de la República de Colombia 18 de Enero de 2011).

Ley 2080, 2080 (Congreso de la República de Colombia 25 de Enero de 2021).

Ley federal que regula el procedimiento electrónico , Drittes Gesetz zur Änderung verwahrungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (Bundestag 21 de Agosto de 2002).

Martín, J. D. (2018). *Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones* (2a. ed.). España: Wolters Kluwer Recuperado de: <https://elibro-net.ucatolica.basesdedatosproxy.com/es/ereader/ucatolica/107199?page=1>.

Martínez, J. J. (2012). *El peritaje informático y la evidencia digital en Colombia: conceptos, retos y propuestas*, Pag 55. Bogota D.C: Universidad de los Andes .

- Medina, M. A. (2009). *Retos y perspectivas del derecho administrativo. Segunda Parte* . Bogotá D.C: Editorial Universidad del Rosario .
- Medina, M. A. (2012). *Globalizacion del derecho administrativo, estado regulador y eficacia de sus derechos* . Bogota D.C: Editorial Universidad del Rosario .
- Medina, M. A. (2017). Derecho administrativo: reflexiones contemporaneas. En M. A. Medina, *Derecho administrativo: reflexiones contemporaneas* (págs. 142-146). Bogota D.C: Editorial Universidad del Rosario.
- Modesto J. Fabra Valls, J. L. (2008). *El documento electrónico: aspectos jurídicos, tecnológicos y archivísticos*. España, : Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions.
- Nación, A. G. (2015). *Gestión documental y gobierno electrónico* . Bogotá D.C, Colombia , Cundinamarca .
- Palacios, F. P. (2017). *La prueba en la era digita*. España: Wolters Kluwe, Recuperado de <https://elibro-net.ucatolica.basesdedatossezproxy.com/es/ereader/ucatolica/55973?page=23>.
- Palencia, R. (Noviembre de 2017). *Archivo General de la Nación*. Obtenido de Erika Lucia : https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/DocumentoOficial_V1GuiaDocumentoYExpedienteElectronico_Nov2017.pdf
- república, C. d. (1999). Ley 527. En C. d. república, *define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales*. Bogota D.C.
- Roldán, G. Z. (2003). Globalización y derecho . En G. Z. Roldán, *Globalización y derecho* . Bogota D.C: Editorial Politéctino Grancolombiano.
- Salgado, L. F. (2015). *Derecho Informatico* . Mexico : Grupo Editorial Patria .
- Sanchez, M. E. (2014). *Eficacia y validez del acto administrativo electronico*. Bogota D.C: Universidad Católica de Colombia.
- Tomás de la Cuadra Salcedo, J. L. (2018). *Sociedad y Derecho Digital* . España : Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

